

Chaco Díaz

DOCUMENTO DE DISCUSION INTERNA

111 SEMINARIO DE ORGANIZACION REGIONAL

15 y 16 DE JUNIO DE 1985

LA SITUACION NACIONAL Y NUESTRA PROPUESTA

La situación recibida
Cuánto avanzamos en 1984
Hacia dónde avanzar ahora
Nuestras alianzas

-FRANJA MORADA- JUVENTUD RADICAL - JUNTA COORDINADORA NACIONAL -

La Situación Heredada y nuestra propuesta

Cuanto avanzamos en 1984 - Hacia dónde avanzar ahora - Nuestras alianzas

La situación del país a fines de 1983.

Es innegable que para poder analizar con objetividad la marcha del proceso argentino durante 1984, debemos pasar en limpio los aspectos principales que nos mostraba la realidad nacional cuando asumió el poder el gobierno constitucional.

Ello obliga a revistar la situación política, económica, social e internacional atravesada por nuestro país en esa época.

Política.

El esquema de poder vigente durante la dictadura, culminación de falencias históricas del sistema democrático. del comportamiento de la sociedad política argentina y de la iniciativa que sobre ese desgaste gestaron los intereses antipopulares en el país, se caracterizó por la exclusión popular de cualquier posibilidad de incidir en la toma de decisiones públicas, y en la asunción por parte del poder militar del "poder total" del Estado.

El poder democrático era inexistente. La sociedad no estaba organizada en fuerzas políticas que potenciaran sus reclamos luego de intelectualizarlos, luego de procesar en su seno las contradicciones secundarias que existen naturalmente en el campo popular.

La lucha se planteaba en términos de correlatos casi naturales de los agrupamientos de fuerzas que se dan en nuestra sociedad históricamente. El antipueblo en el poder, representando los intereses de la dependencia, del atraso, del estancamiento, de los grandes conglomerados económicos multinacionales, del sector financiero concentrado, de la "élite". El pueblo en el llano, tumultuoso, instintivo, "amuchandose" para empujar la dictadura, recuperar su gobierno, comenzar luego a rearmar su democracia.

El deterioro del poder autocrático, acelerado luego de la derrota de Malvinas, abrió una brecha por la que empezó a avanzar el proyecto popular. La aparentemente omnipotencia del poder autocrático tuvo que ir cediendo terreno a las presiones crecientes de todos los estamentos de la sociedad argentina. Estas presiones, sumadas al agotamiento de la propuesta política y económica antipolar, desembocaron en la retirada que significó la salida democrática y el proceso electoral de 1983.

totalmente la estructura de poder del Estado argentino, no fué ni podía ser la definitiva solución para las falencias tradicionales de nuestro funcionamiento político y del comportamiento político de nuestra sociedad.

Una sociedad teñida de autoritarismo durante décadas, con hábitos de comportamientos en los que el propio miedo inconsciente generado en el lustro del terror debilitaba pautas racionales de interpretación de la realidad y de propuestas imaginativas o novedosas, era imposible que de la noche a la mañana tuviera una democracia elaborada, lubricada en su funcionamiento, acostumbrada a dimensionar el tono de sus debates internos, a separar lo principal de lo accesorio, a no antagonizar posiciones que no expresen la contradicción fundamental o a no procesar adecuadamente sus conflictos intersectoriales.

Por otra parte, el comportamiento del sector militar -aún en retirada, aún habiendo declinado el ejercicio del gobierno- también era el desemboque histórico de una formación y de una praxis que lo autoerigía en "última salvación" o "reserva moral" de la Nación, frente a los aparentes fracasos de las fuerzas populares en el poder. La secuencia tradicional era: "Democracia (de mala gana) - Ineficacia de la democracia - sicosis de desorden social con la potenciación de demandas sectoriales insatisfechas - Caos social - Falta de mecanismos institucionales para solucionar las situaciones - La "reserva moral" debe tomar las riendas del país"

De esta forma, la ecuación del poder vigente en nuestra sociedad aceptaba en la mentalidad de los argentinos la presencia militar en el poder y hacía sentir y actuar siempre a los militares con esa expectativa. La propia sociedad política, muchas veces recurrente al propio poder militar para instarlos a actuar fuera del marco institucional, aceptaba y respetaba un funcionamiento en el que la "opinión" del poder militar era siempre tenida en cuenta, aún en épocas de democracia, como la opinión de un significativo grupo de poder en la sociedad.

La primera consigna de nuestro gobierno, que se propuso inaugurar cien años de democracia ininterrumpida en el país fué: consolidar el poder democrático.

Eso implicaba trabajar en varios frentes, tendiendo a desarticular la antigua ecuación de poder que contenía a las F.F.A.A. como factor determinante del orden interno. Y paralelamente, a construir un poder democrático suficientemente sólido como para garantizar el orden interno y conducir a la Nación hacia la realización de su proyecto estratégico.

Económica.

No menores eran los problemas en el plano económico.

El inmenso condicionante de la deuda externa (43.600 millones de dólares a diciembre de 1983), el escasísimo nivel de reservas (apenas 102 millones de dólares

en esa fecha), el nivel de desocupación y sub ocupación en un grado muy elevado, el nivel salarial a la mitad de su valor histórico, las economías regionales al borde de su desaparición, las empresas industriales en un gran proceso de desinversión, con su rentabilidad atacada por un esquema financiero hipertrofiado y luego de un proceso de concentración económica que llevó a la quiebra a numerosas empresas nacionales pequeñas y medianas y dejó el mercado en manos de monopolios y oligopolios, daban un panorama realmente desolador que se sumaba al cuadro de extrema gravedad de las cuentas fiscales.

En diciembre de 1983, el Estado Nacional financiaba con recursos genuinos apenas el 22 % de sus gastos. Esto equivale a decir que de cada cien pesos que el Estado gastaba, sólo veintidós eran producido por la recaudación fiscal y setenta y ocho con emisión monetaria o endeudamiento.

Los atrasos en los pagos externos, por su parte, ponían también su cuota de dramatismo. Desde la guerra de malvinas -mediados de 1982- los pagos externos estaban en una híbrida situación de real incumplimiento aunque con algunas formalidades de prórrogas. Es decir, a los vencimientos normales había que sumarle los atrasados. En términos económico-financieros, podemos decir que el último año y medio de la dictadura, el país vivió "al fiado".

El sistema financiero, además, fué montado como un mecanismo de transferencia de ingresos hacia las empresas superconcentradas, vinculadas directamente con los bancos privados más grandes de plaza, los que, a su vez, con un sucursalismo exagerado, captaban -captan- fondos del ahorro popular para derivarlos hacia los mecanismos especulativos o hacia su operatoria económica, dejando sin fondos a las empresas pequeñas y medianas.

La escasa capacidad de crédito de nuestra economía, producto de nuestro escaso nivel de ahorro interno, era derivada hacia las empresas dominantes en el mercado. La banca estatal perdió progresivamente posiciones, retrocediendo del 80 % de los depósitos antes de la reforma financiera de 1977, hasta el 40 % en que ronda en la actualidad.

Los años del "proceso" provocaron cambios importantes en la estructura de nuestra economía. Su dato predominante fué la concentración, la centralización, la extranjerización y el reforzamiento de los lazos de la dependencia. Concentración, porque se produjo una quiebra generalizada de pequeñas y medianas empresas nacionales, favoreciendo la posición relativa en el mercado de las grandes empresas de la cúpula, que, salvo excepciones, resultaron aventajadas con la política económica aplicada en el lustro. La brecha que separa las empresas grandes de las pequeñas y medianas se amplió, y el mercado quedó prácticamente en forma total en manos de esas 500 grandes empresas, dueñas de la formación del precio, es decir, dueñas de la inflación.

Centralización, porque se consolidaron grupos económicos en forma horizontal,

quedando el centro de decisión empresario de cada grupo con posibilidades de incidir en distintas áreas económicas. Creció la vinculación de las empresas de la cúpula con el sector financiero y con ello restó a las empresas pequeñas y medianas la posibilidad de acceder en forma ventajosa o simplemente competitiva al crédito, y restó al Estado el manejo de la intermediación ahorro-crédito con el crecimiento proporcional de la banca privada, ya analizado.

En síntesis: las empresas que quedaron, son más dependientes de insumos y tecnología del exterior que las que quebraron; sus productos generan la concentración mayor aún de los ingresos, porque se destinan a los estratos sociales altos; su poder de decisión dentro de la economía aumentó en detrimento del poder del Estado y de las pequeñas y medianas empresas.

La extranjerización puede observarse, simplemente, en los informes de las primeras cien empresas por facturación que publican anualmente las revistas económicas especializadas. Prácticamente no figuran en ese listado empresas argentinas, las que tenían hace diez o quince años una presencia significativa.

El reforzamiento de los lazos de la dependencia, es el producto de todos estos cambios en los mecanismos económicos. Hay más dependencia porque ahora los insumos semielaborados y las materias primas son una condición creciente de funcionamiento de nuestra industria. Hay más dependencia porque desaparecieron las pequeñas y medianas empresas industriales, en general más democratizadoras en la distribución del ingreso, generadoras de productos de consumo popular, integradoras geográficamente de toda la Nación, utilizadoras de tecnología nacional o con menores componentes de tecnologías extranjeras.

Y fundamentalmente, hay más dependencia por el nivel de endeudamiento externo, la nueva variable de la dependencia de la economía internacional.

La deuda genera servicios que "chupan" todo el excedente internacional de nuestra economía. En 1984, el año de mayor superávit comercial de la historia económica argentina, el saldo comercial favorable fué de cerca de Cuatro mil millones de dólares (U\$S 4.000.000.000). En el mismo año, los servicios de la deuda (es decir, los intereses) superaron los Seis mil millones de la misma moneda.

Esta cadena no es fácil de romper. Todo forma parte de un orden económico nacional e internacional respaldado por los centros más grande de poder mundial, frente a un mundo en desarrollo cooptado muchas veces en sus actitudes y pensamientos por la forma de razonar del Norte. Un orden que no podemos alterar nosotros solos sino que debe ser objeto de una estrategia de política internacional que debe pasar por unir al sur para sumar fuerzas y que debe partir de esta realidad contradictoria que son los países no alineados, del Tercer Mundo o en Vías de Desarrollo, con sistemas políticos y sociales disímiles, con niveles culturales e ideologías muchas veces encontradas y con un Norte cada vez más agresivo y belicista.

En lo que respecta a nuestro país, la dependencia se agrava por la singular estructura de comercio internacional heredada de la dictadura. En efecto, los insumos que requiere para funcionar nuestro aparato industrial vienen en su inmensa mayoría de los mismos países que concentran nuestras deudas: Estados Unidos, Europa occidental y Japón. A su vez, nuestras exportaciones se concentran en una sola dirección, también en su gran mayoría: La Unión Soviética y países socialistas. Esta tenaza impide nuestra libertad de maniobras, "ata" la capacidad de decisión de nuestra economía y la condiciona en grado sumo para el caso de optar por un cambio drástico o una ruptura con el orden dependiente vigente.

¿Con qué fuerzas podríamos negociar la deuda externa con los acreedores externos, si ellos son dueños, con un bloqueo comercial que ni siquiera necesita ser expreso, de hacer paralizar toda nuestra industria actual frenando nuestros insumos? Esto es la mejor demostración de la dependencia que implica la deuda, la inserción comercial internacional, la estructura industrial extranjerizada, y el aislamiento entre nuestros países del sur.

El desequilibrio de las cuentas públicas, por otra parte, era otro condicionante grave, no sólo por la diferencia "ingresos-egresos", sino por la estructura del gasto y de la recaudación.

El gasto público mostraba, como características nuevas con respecto a los presupuestos de una década atrás, el traslado a las cuentas públicas de la totalidad de los servicios de la deuda externa. En efecto, la dictadura incorporó a las cuentas pasivas del Estado Nacional toda la deuda externa, pública y privada del país. De esta forma, los fondos para abonar esta deuda se trasladaron al presupuesto estatal, deben surgir de los impuestos recaudados, de la emisión o del nuevo endeudamiento. En estos tiempos, alrededor de un tercio del gasto público corresponde a los intereses de la deuda del Estado, interna o externa. Deuda que debe pagarse mientras no cambiemos todo el esquema de funcionamiento de la economía y su relación con el exterior, lo que no es una tarea que pueda realizarse con un decreto o una simple declaración política por la complejidad de los mecanismos que implica.

Otro aspecto negativo en la estructura del gasto público del Estado Nacional lo daba la distorsionada financiación de los Estados provinciales. A raíz de la declinación de la recaudación de los impuestos coparticipados (IVA y Ganancias), y de la declinación de la recaudación propia por impuestos de su jurisdicción, los Estados provinciales habían debido recurrir, a partir de 1982 pero fundamentalmente en 1983, a la ayuda del tesoro nacional. Esta ayuda, una especie de "dádiva" que la Nación giraba a las Provincias para nivelar sus gastos, era también una pesada carga para el gasto público nacional.

El otro elemento negativo era la exagerada asignación de recursos para Defensa y Seguridad, y el retraimiento de los recursos destinados a Acción Social,

Educación y Salud Pública.

Esta realidad obligaba a trabajar una ofensiva que, si bien debía comprender varios frentes de lucha, en realidad determinaba jerarquías de problemas de cuya solución dependía lisa y llanamente el funcionamiento de la economía nacional.

Deuda externa renegociada para tener un perfil tranquilo de algún tiempo en el sector externo; cuentas públicas niveladas que permitieran comenzar a realizar alguna política económica desde el Estado; recuperación del salario lo más que se pudiera con el deteriorado aparato industrial que nos quedó; recuperación de las economías regionales; comenzar a reinsertar el país en su comercio internacional con otras características; realizar una ofensiva política y económica internacional tendiendo a unir al sur para sumar fuerzas en el reclamo de un nuevo orden económico internacional que permita cambiar el marco de renegociación de la deuda que debemos convertir en un tema de alta política mundial; tender líneas de integración de América Latina.

Social.

El esquema de exclusión de participación popular que fue la línea ideológica de la dictadura se tradujo en una política elitizante cuya constante fue desde el comienzo aumentar cada vez más la diferencia entre los estratos altos de la población (a los que se tendía a asimilar, en sus niveles de consumo, a los países más desarrollados de occidente) a costa del deterioro cada vez mayor del nivel de consumo de las grandes mayorías.

Esto no era por maldad. Era, por el contrario, la lógica intrínseca del modelo de Argentina impulsado desde el poder. Era con ese mercado superconcentrado con el que deseaban trabajar las clases dominantes, para él estaba destinada la producción local que se pretendía que subsistiera o los productos que se importarían.

Para los sectores populares la línea era el empobrecimiento. Mayor "ejército de reserva", que tirara abajo los salarios; apertura aduanera, para que quebrara la pequeña y mediana industria no integrada al nuevo sistema. Derogación de leyes sociales y privatización de educación y salud, haciendo de esta forma más regresivo aún el ingreso al tener que soportar con su escaso sueldo o con el reducido ingreso de un cuentapropista la cuota del colegio privado o de un seguro privado de salud. De esta forma se llegó a una situación tal de distorsión que llevó las matrículas universitarias a la tercera parte de su nivel histórico, las tasas de demanda de bancos en los secundarios se estancó en los niveles de fines de los años '60, y la primaria exhibiendo los índices de deserción más altos de la historia argentina.

Enfermedades endémicas propias de la pobreza, desterradas hacía años en la Argentina, se adueñaron de toda la geografía del país, avanzando sobre las propias

concentraciones urbanas, orgullosas en su aspecto edilicio con obras faraónicas, tras las cuales se ocultaba la pobreza extrema de un pueblo que hasta hacía pocos años había solucionado sus problemas de alimentación y salud de las grandes mayorías y luchaba por el crecimiento autónomo, y sobre el fin del proceso ya se resignaba sólo a tener qué comer.

La exclusión social era el resultado lógico de la exclusión política y de la exclusión económica.

Aquí la ofensiva debía llevarse sobre los aspectos más dramáticos de la situación existente: hambre, estado sanitario de la población, **analfabetismo**

Internacional.

"Occidental y cristiana". Así se definió la dictadura cuando debía explicitar la ubicación internacional de nuestro país.

Y así terminó. Despreciada por occidente y por oriente, aislada en América Latina, desprestigiada en el mundo al punto de haber convertido el nombre de la patria en sinónimo de muerte, desaparición forzada de personas, **patoterismo internacional**, guerra fratricida, irresponsabilidad política.

Enlodando los valores democráticos y liberales de la cultura occidental; negando hasta el cansancio los principios de justicia, igualdad y fraternidad del cristianismo. Convirtiendo al país en la síntesis de todo lo que no hay que ser para ser merecedor de respeto y poseedor de dignidad.

La situación internacional en la que la dictadura deja a la Argentina no podía ser peor. El concepto, aunque sea reiterativo, es claro: **aislamiento**.

NUESTRAS PROPUESTAS PRINCIPALES

CONSOLIDAR EL PODEP DEMOCRATICO

Cambio de la ecuación de poder en la sociedad. Ese es el objetivo. Para ello se hacía necesario desmilitarizar la sociedad, reducir hasta hacer desaparecer la incidencia de las FFAA como poder político interno y construir un poder democrático.

co que garantizara el procesamiento ordenado de los conflictos sectoriales de la sociedad.

Luego de un año de gobierno democrático podemos decir que hemos avanzado correctamente en el primer aspecto y tenemos déficits importantes en el segundo.

Para cambiar el esquema de funcionamiento político de la sociedad era necesario, decíamos, quitarle sus componentes autoritarios. La libertad más absoluta que las generaciones que viven en el país hoy recuerden, fué implantada y garantizada para todos. La censura desapareció y la libertad de expresión y crítica tiene absoluta vigencia.

La fuerza política del gobierno constitucional fué dirigida, en el plano militar, a terminar con la incidencia de este factor distorsionante de la democracia que era la presencia del poder militar como un componente de la ecuación de poder global de la sociedad.

Cambiamos la estructura de mandos. Desaparecieron los tristemente célebres "Comandantes en Jefe" de cada arma. El único Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, sostuvimos, es el Presidente de la Nación.

Reestructuramos el Ministerio de Defensa. No se dividió más internamente por "Fuerzas". Las fuerzas dependen del Secretario de Defensa, pero se sustrajo al manejo de las armas la conducción de las empresas que estaban bajo las jurisdicciones de las mismas. Todas ellas pasaron a depender del Sub secretario de Producción para la Defensa, un civil de confianza de la conducción política. De esta forma quedaron subordinadas al poder constitucional empresas que conforman el "holding" más grande del país, al aportar alrededor del 50 % del PB industrial argentino y que se encontraban marginadas del control de las leyes de mercado -porque eran estatales- y de las normas administrativas públicas -porque eran militares-.

Los gastos de las FFAA volvieron a tener el sistema de control de la administración nacional, abrogando la ley de 1972 que dejaba en manos de los comandos de cada arma las compras que se efectuaran, sin obligación de rendir cuentas por las normas regulares.

Se disminuyó a la mitad el número de Generales en actividad y una reducción similar hubo en las otras armas. Se redujo sustancialmente el número de compatriotas convocados para cumplir con el Servicio Militar. Se paralizó la carrera armamentista al cambiarse las hipótesis de conflicto del país y proyectarse una política exterior de paz y buena vecindad, base para la unidad continental que perseguimos.

Todo ésto significó disminuir sustancialmente el poder político interno de las Fuerzas Armadas, ampliando su poder "hacia afuera", a partir de una nueva doctrina de defensa que terminara con la doctrina de la "seguridad nacional" y se elabore por todos los sectores nacionales, y no por el Pentágono.

Nada de ésto hubiera podido ser posible, si la fuerza política del gobierno constitucional se hubiera destinado a la revancha o a la venganza. Estaríamos enfrentados a todas las fuerzas, estaría sembrada la inestabilidad y estaríamos profundizando un enfrentamiento interno entre sectores nacionales que deben estar unidos para sostener el proyecto nacional.

La responsabilidad por los años de muerte y destrucción en el país fueron imputadas a sus verdaderos causantes, las tres Juntas Militares, que junto a los principales exponentes de la represión criminal, y de las cúpulas guerrilleras, están siendo procesadas por orden del Gobierno Constitucional, garantizando sin embargo para todos el pleno ejercicio de sus derechos que se traducen en una defensa imparcial, sin presiones ni condicionamientos y en la independencia del Poder Judicial que los juzga. Poder Judicial que, a pesar de sus falencias -que son las mismas falencias de toda la sociedad-, ha tenido la aprobación del Senado de la Nación por sanción UNANIME, en todos los casos, de todos los Senadores que componen el cuerpo, contando el justicialismo -es bueno recordarlo- con mayoría propia en la Comisión respectiva.

Frente a esto, la estrategia de las cúpulas de la muerte es tratar de identificar sus responsabilidades con las Instituciones Militares. Como una forma de salvar sus inexcusables culpas, sostienen hoy que procesar a esas cúpulas es procesar a las Fuerzas Armadas. De esta manera tratan de incidir en cuadros intermedios sin formación política, insatisfechos por las carencias presupuestarias y por la incertidumbre sobre su futuro. Tratan de mantener la unidad de las fuerzas armadas tras su imagen de perseguidos injustamente.

En esta estrategia los jefes represores coinciden objetivamente con los reclamos de algunos organismos de "derechos humanos", los que con intenciones totalmente distintas tampoco separan los escalones de responsabilidad que son imprescindibles para comenzar a construir la democracia, y más aún, para comenzar a construir el país.

Nuestra posición ha sido clara y ha sido relativamente exitosa. Ha costado esfuerzos permanentes al poder civil trabajar en este proyecto con cuadros formados desde las aulas del Colegio Militar con una manera de razonar la sociedad y de razonarse a sí mismos como "salvadores de la patria". Sin embargo, el afianzamiento del poder constitucional frente a las instituciones armadas no sólo no se deteriora sino que se afianza, al tener sucesivas demostraciones de decisión en el ejercicio de la autoridad para superar los cuestionamientos que esporádicamente surgen de los cuadros militares.

Tenemos que avanzar en la modificación de los planes de estudio del Colegio militar, en la nueva Ley de Defensa y en la profesionalización de las Fuerzas Armadas para recuperar su prestigio ante nuestro pueblo y ante los pueblos hermanos latinoamericanos, habida cuenta que serán una pieza imprescindible para la defensa nacional y para sostener nuestro modelo de desarrollo. Pero este prestigio deberá partir de un avance de nuestro proyecto político, que implica la necesidad de un trabajo de difusión y discusión sobre el nuevo modelo de país que incluya a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

El prestigio deberá asentarse en un comportamiento adecuado de los cuadros militares y este comportamiento, en gran medida, depende del trabajo político que los militantes políticos populares se den hacia el sector. No podemos dejar que los únicos que hagan política con los militares sean los retirados y la oligarquía. Debemos tomar contacto con los oficiales y suboficiales de todo el país, y trabajar con ellos como con cualquier otro sector social: tomar contacto con su realidad, analizar sus problemas concretos, sus aspiraciones, sus creencias, para procesar las mismas e integrarlas con el proyecto nacional.

Si no logramos integrar las Fuerzas Armadas al proyecto nacional, gran parte de la lucha por la liberación y la integración continental estará perdida. Y el antipueblo las integrará para su campo.

El otro aspecto político fundamental de nuestro período de gobierno es la necesidad de reconstruir el poder democrático. Esto implica, sin dudas, la reconstrucción de nuestras fuerzas políticas, y es aquí donde de nota nuestra mora mayor.

El avance del proceso político no ha tenido su correlato natural en la reconstrucción de la sociedad política. Nuestros partidos siguen funcionando con moldes propios de la sociedad liberal y los hábitos de funcionamiento político no han asumido la dramática realidad del país y la necesidad de definir el proyecto nacional compartido.

Esto pasa en las fuerzas de la oposición y pasa también en nuestro radicalismo. Si nosotros no logramos convertir a las fuerzas políticas en el esqueleto de la sociedad democrática, nadie podrá garantizar el orden social democrático. Porque salimos de una etapa política que ha dejado hondas huellas en el subconsciente colectivo de los argentinos, y no será posible pensar en mucho tiempo que el orden social pueda ser garantizado con la fuerza de la policía o con tanques en la calle.

Pero toda sociedad necesita un orden para procesar sus conflictos, y la democracia más que ninguna. Ese orden debe ser garantizado por partidos serios, conscientes, que actúen como verdaderas usinas ideológicas de la Nación y como canales eficaces de participación popular y sectorial donde se elaboren, con marcos orgánicos racionales de toma de decisiones, los aspectos fundamentales del proyecto nacional.

Esta demanda de la sociedad no es de responsabilidad tanto del Gobierno como de la sociedad en su conjunto, por lo que es ajena a este documento. Baste como ejemplo recordar lo ocurrido con el paro de los productores, cuando reclamos legítimos de los hombres de campo fué mal canalizado por las organizaciones representativas de la oligarquía y generó un falso enfrentamiento entre los productores pequeños y medianos el gobierno. En lugar de procesarse adecuadamente los problemas existentes, de aprovechar la crítica situación vivida en el campo para desnudar la política económica internacional del imperialismo que provoca la baja del precio de nuestros productos agropecuarios, los productores son llevados a un enfrentamiento al gobierno justamente cuando éste estaba a punto de dar una importante batalla, a través del viaje presidencial a los Estados Unidos para defender, justamente, el precio de nuestros productos.

Si el partido funcionara como debiera, nuestros militantes debieron estar presentes en las asambleas de productores, para dar allí la batalla ideológica y política contra la reacción, en lugar de desaparecer o replegarse en los Comités y obligando al gobierno a recurrir a la policía para garantizar el orden. Con el partido dando el debate, el orden se garantiza con ideas claras -porque no tenemos nada que ocultar y, por el contrario, mucho por decir-. Con el partido ausente, no hay otra forma de ordenar la vida social que con las fuerzas de seguridad. En nuestra concepción cabe una sola respuesta a esta opción, si queremos en realidad construir una democracia participativa.

Movimiento Agrario

El gobierno debe, por lo expuesto, fomentar la participación política favoreciendo más francamente la actividad de los partidos, otorgando las franquicias postales y de transportes correspondientes, eximiendo de impuestos a los Comités, fomentando la participación política de la juventud a través de la educación cívica en los Colegios Secundarios, y en general, prestigiando la actividad política como fundamental que es en una sociedad democrática.

REACTIVAR LA ECONOMIA, SUPERAR LA EMERGENCIA, SENTAR LAS BASES DE UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

La situación que vive el país no es sencilla. Es sin dudas la más difícil de su historia moderna. Pero es también la más promisoría, si movemos bien las piezas y actuamos correctamente. Para ello debemos despojar nuestros análisis de pre-conceptos y entender que la inteligencia y la imaginación de todos, el respeto por las ideas ajenas y la buena fé en los planteos permitirán analizar concretamente la realidad concreta, proponer las soluciones también concretas y escaparle al ideologismo libresco de la izquierda y la derecha que no presentan soluciones reales a nuestros problemas ni dan alternativas de crecimiento.

Que la situación no es fácil lo dicen cuatro verdades terminantes: 1) la economía nacional hace tres lustros que no crece. 2) Tenemos un 25 % más de población que hace quince años. 3) Tenemos una deuda de casi 50.000 millones

de dólares que hace quince años no existía. 4) Nuestros productos de exportación valen, en promedio, el 70 % de sus precios históricos (es decir, han tenido una % declinación de un 30-% de promedio).

De ninguna de estas variables es culpable el gobierno radical ni hubiera sido culpable ningún otro gobierno que hubiera surgido del proceso electoral del 30 de octubre de 1983. Esto equivale a decir que si otro hubiera sido el resultado de los comicios, difícilmente la situación sería diferente a la actual porque son características económicamente muy rígidas que obran como condicionantes muy grandes para nuestra coyuntura económica y que se suman a los cambios estructurales sufridos durante el proceso descriptos con anterioridad.

El primer problema tratado fué el de la deuda. Pensamos que frente a una deuda global de alrededor de 800.000 millones de dólares que tienen los países no desarrollados, y habida cuenta que esa deuda genera intereses anuales por valor de alrededor de 100.000 millones de dólares, esa deuda es impagable con el superávit comercial de 25.000 millones de dólares al año que tiene la balanza comercial de los países del sur.

Esto nos señala como la hipótesis más probable la del empeoramiento de las condiciones de endeudamiento y como muy probables nuevas crisis de pagos por el hecho de que las realidades sociales de los países en desarrollo no permitirán una perpetuación de su atraso que implicará directamente hambrunas y situaciones de gran tensión e inestabilidad.

Esto generará la inexorable variación de las condiciones que los acreedores imponen, que deberán flexibilizarse si quieren cobrar algo de lo que reclaman. Y frente a una Argentina con condiciones de relativa ventaja marginal con respecto a las posibilidades medias de los países endeudados, el mejoramiento global de estas condiciones también favorecerá nuestra posición relativa. Eso, lo recordamos una vez más, si actuamos como debemos, con inteligencia, imaginación y pragmatismo.

Actuar como debemos implica tender a una creciente independencia de nuestro país con respecto a los centros de poder del norte industrial. Para ello se hace imprescindible "patear la deuda para adelante" lo más que se pueda, mientras impulsamos la integración continental, la apertura hacia los países no alineados en nuestro comercio exterior, el impulso de líneas de industrialización interna que no dependan tanto de insumos, tecnología y servicios que provengan de los países acreedores y reclamar a la vez un nuevo orden económico internacional que pare el armamentismo alocado de las superpotencias, levante las barreras aduaneras de los países centrales y reduzca las tasas de interés de la economía norteamericana que impulsa hacia arriba el servicio de la deuda de nuestras naciones.

Canadá, España, Checoslovaquia, Cuba, Nicaragua, etc., fueron las nuevas opciones de nuestro comercio exterior.

El objetivo era ampliar el margen de maniobra y con él la capacidad autónoma de decisión de nuestra economía.

Ampliamos el comercio intrarregional. Impulsamos la formación de "Latin-export", empresa latinoamericana que está destinada a favorecer el comercio del área.

Se creó la Secretaría de Comercio Exterior, que comenzó de inmediato a promover las relaciones comerciales más intensas con los países del área y a abrir nuevos mercados. Se sancionó la ley que da el marco normativo adecuado para la creación y afianzamiento de compañías de exportación nacionales, con el apoyo franco del Estado Nacional.

Alineada América Latina, salimos al mundo a buscar coincidencias con nuestros reclamos. El viaje presidencial a la India y la declaración de "los-seis" implica juntar los reclamos de todos los países del sur contra el armamentismo, por la paz, por un nuevo orden económico internacional y, en sí, implica un hecho nuevo muy auspicioso para fortalecer la posición del "sur", cuyas realidades políticas diferentes hacen mucho más difícil el trabajo de coordinación de sus reclamos.

Luego de lograr la fuerza política y haber recuperado el prestigio internacional del país sustancialmente, se realiza la culminación de la primera etapa de nuestra estrategia: el viaje a los Estados Unidos del Presidente de la Nación. Allí hemos sentado las bases de una relación madura que tenga en cuenta la realidad concreta del mundo y la región y nos fija un curso de acción -quizás el único posible- que nos permite asumir las realidades existentes, no renunciar a nuestro proyecto estratégico y por el contrario, potenciarlo; y establecer incluso mecanismos de disenso que no pongan en peligro la democracia en el país por acción del imperialismo.

Inmediatamente después, profundizamos nuestra acción unitaria latinoamericana. La propuesta realizada por nuestro Presidente en México de realizar una Cumbre Latinoamericana se enmarca en esta dirección.

Pocas veces en nuestra historia la política internacional de la Argentina ha estado tan vinculada con la posibilidad de su subsistencia económica, con la política económica. Esto ha sido asumido y ha merecido una estrategia global que tiene en cuenta la complejidad y la interrelación del mundo de hoy, entendiendo que la realidad internacional se parece cada vez más a un gigantesco ajedrez donde la imaginación, la inteligencia, la sensatez y la estrategia son elementos esenciales.

La crisis de la economía occidental es inexorable. Puede llegar en forma negociada, si los países acreedores maduran en sus posiciones y aceptan la necesidad del diálogo Norte-Sur, el dramatismo de las situaciones internas de nuestros países y la necesidad de paralizar el derroche de ingresos que significa la carrera armamentista, financiada en definitiva por nuestros pueblos pobres.

Pero llegará en forma salvaje, si persisten las estrategias belicistas y casi paranoicas que se notan en los exponentes de las derechas políticas de los países centrales de Occidente.

Para enfrentar tanto una como otra alternativa, el camino estratégico no puede ser otro, para nuestros países, que aumentar los márgenes de autonomía de nuestras economías, a fin de poder soportar la crisis sin consecuencias tan graves en el orden social y económico.

Hacia allí están dirigidos los esfuerzos del gobierno constitucional.

....

Pero si decimos que en el orden internacional la política está cada vez más vinculada a la economía, algo similar ocurre en el orden interno. Quizás aquí se note con mayor claridad los déficits que ocasiona la falta de una estructura partidaria que procese adecuadamente los conflictos sectoriales, alineando a los diferentes sectores sociales en un proyecto compartido. Esto es negativo en la base, desorientada, y en la cúpula de conducción, que corre el peligro de no palpar con claridad la evolución del nivel de conciencia de la población, agredida por la crisis y confundida por la interpretación de la misma que hacen los medios de comunicación.

El plan de mediano y largo plazo propuesto como modelo para el país por nuestro gobierno "cierra" en términos económicos, pero no en términos políticos. Ello porque no da respuestas claras para los sectores sociales que son la base social natural de la democracia y de nuestro propio gobierno, sectores que tampoco son objeto de una política de información y formación por parte de las fuerzas políticas partidarias ni -obvio es decirlo- por parte del Gobierno.

El mismo da por supuesto que los argentinos conocen con claridad la gravedad de la crisis, sus variables, sus causas, sus consecuencias y sus ínsitas limitaciones para otras opciones de política económica. Pero no marca con claridad los sectores sociales antagónicos con el proyecto y con la propia existencia de la Nación, ni los sectores sociales que deben movilizarse para cambiar las estructuras económicas dependientes.

Es comprensible que un documento oficial de un país democrático no pueda hacer ideología. Pero no es comprensible que el partido político que ocupa el gobierno no presente esta estrategia de mediano y largo plazo con mayor claridad ideológica e ideológico a la misma.

Y los argentinos no conocen la gravedad de la crisis, y necesitan entender con mayor claridad qué sectores son aliados y cuáles no en este plan estratégico de mediano y largo plazo.

Basar la reactivación y el crecimiento en empresas concentradas puede ser una alternativa, quizás la única viable en lo inmediato al no existir en el país empresas pequeñas y medianas que sirvan de centros de acumulación económica. Pero ello es válido a condición que tengamos en cuenta en términos políticos de lo coyuntural de esta decisión, que amplíemos la participación del Estado para neutralizar la fuerza de los monopolios y oligopolios y democratizar la distribución del ingreso y para fomentar la creación y afianzamiento de pequeñas y medianas empresas y cooperativas.

Plantear lo primero sin lo segundo es lo que nos deja sin respuestas políticas, y, a largo plazo, también económicas.

Nuestra base social, la base social de la democracia, no son las empresas concentradas, sino el pueblo. Esto está claro en todos los niveles. Debemos avanzar pues en una alternativa estratégica que permita la coexistencia con estas empresas, las únicas que prácticamente hoy existen en el país. Pero siendo conscientes de la necesidad de avanzar en la formación de nuevas alternativas productivas que hagan que esta realidad no sea también la única realidad dentro de algunos años, sino que simplemente hayamos aprovechado lo aprovechable, evitando los aspectos negativos de un desarrollo fundado en este tipo de empresas para una economía atrasada, dependiente y vulnerable, como la nuestra.

Conocer la gravedad de la crisis hará ver que una meta de crecimiento del 4 % acumulado en los próximos cinco años no es una meta modesta sino revolucionaria. Entender con mayor claridad las causas de esta situación y la alternativa estratégica de crecimiento propuesta, hará que los pedidos de esfuerzos no sean una simple repetición de frases elaboradas por todos los gobiernos sino el precio imprescindible para avanzar en un camino asumido por toda la sociedad, cuya meta también sea visualizada con claridad por toda la sociedad que avanza en su construcción.

Un mayor conocimiento de la realidad económica permitirá, por último, ampliar los márgenes de maniobra de la conducción económica, al permitir procesar con mayor racionalidad los conflictos sectoriales y evitar las demandas "fuera de contexto", que son un peligro latente contra el orden democrático.

LA POLÍTICA INTERNACIONAL

Al hablar de la política económica se ha avanzado bastante en este aspecto de la marcha del gobierno. Todo aquí ha formado parte del mismo proyecto estra-

tégico. Romper el aislamiento, mejorar las relaciones con América Latina y los países no alineados para unir fuerzas en la lucha por metas comunes, buscar aliados en los sectores progresistas del mundo que puedan apoyar estos reclamos, reafirmar los principios tradicionales de nuestra política exterior y priorizar aquellos objetivos de cuya consecución depende, en gran medida, la posibilidad de nuestra propia subsistencia como Nación.

La amistad con los países latinoamericanos para profundizar líneas de integración imponía la solución de los conflictos limítrofes. En este aspecto, el acuerdo de paz con Chile es una demostración que la historia y el futuro común pueden más que la discrepancia ideológica profunda entre los gobiernos de dos naciones. Este acuerdo, además, tiene efectos económicos al posibilitar la integración en empresas comunes para la explotación de la cordillera, y al abrir los puertos pacíficos de Chile para nuestros productos a fin de llegar en forma más rápida y mucho más barata a los grandes mercados del sudeste de Asia, la India y el Japón.

En la relación con los Estados Unidos hemos elaborado un núcleo de ideas sobre la base de las cuales podemos establecer una vinculación más o menos estable, entendiendo que no es posible que esta relación sea condicionante de nuestro desarrollo y de nuestra democracia, pero también que no es aceptable por los Estados Unidos que esta democracia y este desarrollo se desvinculen del problema de la seguridad continental, incluso de los Estados Unidos. Esto quiere decir que con vecinos del Norte debemos establecer normas de convivencia, entendiendo que existen algunos antagonismos que, sin embargo, deben procesarse sin alterar las bases fundamentales de esa convivencia. Esta es la única opción sensata y la única propuesta racional que ha sido hasta ahora elaborada en este aspecto.

Sin embargo, hemos entendido que estos aspectos en los que existen contradicciones ciertas entre nuestros países necesitan de un diálogo en el que el interlocutor de EEUU no sea cada país latinoamericano solo, sino toda la región. A tal fin, hemos impulsado sistemas de consultas permanentes con los presidentes de las naciones latinoamericanas y hemos propuesto la realización de una Cumbre Presidencial Latinoamericana a fin de que nuestros países dialoguen para encontrar las formas de una unidad política y económica creciente en el camino de la unidad política latinoamericana. "Cumplir el sueño trunco de los Libertadores", repite a menudo nuestro Presidente al referirse al tema. Y esto debe significar entrar al siglo XXI -faltan apenas tres lustros- con una América Latina que esté avanzando francamente en la construcción de una Confederación de Naciones.

Hemos levantado la bandera de defensa de los derechos humanos y la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica ha significado que la Argentina ha renegado expresamente de su condición de país violador de la dignidad humana para convertirse en un país militante en esta causa que es una causa universal,

enraizada en los fundamentos de nuestra propia nacionalidad. "Nuestra causa es la causa del género humano" dijo el Gral. San Martín hace más de un siglo y medio. Hoy estamos retomando esa senda aceptando la jurisdicción del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos para que se juzguen los casos en que se impute a nuestro país esa violación.

Hemos sumado el reclamo argentino a la causa universal por la paz y el desarme, entendiendo que estas lacras de nuestro mundo no sólo ponen en peligro la vida en el planeta, sino que además son el lastre que impiden nuestro desarrollo ya que a través de mecanismos perversos de la economía internacional, delineados por las grandes concentraciones económicas occidentales, son nuestros pueblos los que a la postre terminan pagando, con su pobreza y estancamiento, esa carrera armamentista.

Hemos impulsado la solución pacífica de las controversias, dando el ejemplo en el pleito centenario que teníamos con Chile y reclamando del mundo solidaridad para sentar a Gran Bretaña en la mesa de negociaciones por el problema de Malvinas. El aislamiento a que se ve sometido el colonialismo en términos estratégicos, políticos, económicos y hasta militares, es cada vez mayor. Cada vez es más insostenible, hasta para los propios aliados históricos de Gran Bretaña, persistir en apoyar una actitud irracional.

Hemos apoyado las democracias del continente y reclamado el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Bolivia y Nicaragua tuvieron nuestro apoyo económico concreto, con créditos específicos para la producción destinados a aliviar sus dramáticas realidades internas. Hemos apoyado las alternativas de paz del grupo de Contadora y hemos sostenido ante el propio Presidente de los Estados Unidos la necesidad de respetar el principio de autodeterminación de los pueblos y el de no injerencia en los asuntos internos de otros países.

PLANO SOCIAL

Nuestra política ha sido de cambio sustancial en la orientación del gasto público, tratando de terminar con la política de exclusión popular y de elitización de la sociedad impulsada por el gobierno militar.

El PAN ha significado dar alimento gratuito a más de tres millones de compatriotas a los que la crisis económica había alejado por completo de su propia dignidad, restándole lo mínimo imprescindible para vivir: alimentos.

Se ha aumentado el gasto en educación en un 40 % con respecto a los presupuestos del gobierno anterior, llegando en este momento a una suma que supera ya el 10 % del gasto, lo que es infimo en función de nuestros objetivos de máxima pero que implican lo más posible dentro de las carencias presupuestarias con

La escuela secundaria ha recibido una matrícula que ha crecido en un 50 % con respecto a 1983, garantizándose banco a todos los aspirantes, y la matrícula universitaria se ha cuadruplicado con respecto a los niveles de 1983 sin que existan cupos ni aranceles, también a pesar de las carencias presupuestarias.

El Plan de Alfabetización, que se impulsará a partir de este año 1985, incorporará a la vida civilizada a varios millones de argentinos hasta hoy marginados del contacto con el mundo y con las posibilidades de superación que implica saber leer y escribir.

El gasto en Salud Pública ha aumentado sustancialmente, ampliando los servicios y la dotación en medicamentos y alimentación en nuestros hospitales. La solución integral a este problema depende de poder integrar un sistema nacional de salud donde se incorporen las Obras Sociales, lo que exige una tarea política de sensatez e inteligencia para evitar que un tema interno del campo popular divida a los argentinos debilitando su unidad para luchar por temas mayores. La responsabilidad de las conducciones sindicales y de la conducción del Estado en este orden es fundamental, y es otro lugar en donde se hace notar la ausencia de un partido político funcionando que ayude a procesar en las bases esta contradicción dando el debate entre los trabajadores.

.....

La obra del gobierno constitucional ha sido casi heroica si comparamos el país que recibimos, la falta de un partido político orgánico que sirva de soporte del gobierno, que lo ayude a procesar las contradicciones secundarias de la sociedad y a mantener movilizada a la Nación tras sus objetivos estratégicos, y las carencias económicas.

Hay grandes falencias, pero hay logros mucho mayores que las falencias. Lo importante es tomar conciencia de la necesidad de avanzar hoy en la construcción del partido que sirva para conducir al proceso político, que actúe de soporte firme del gobierno constitucional, que dé marcos orgánicos de participación y toma de decisiones al afiliado, que sirva de eficaz correa de transmisión entre el gobierno el pueblo, que procese las contradicciones secundarias para evitar que una antagonización de las mismas pueda llevar la frustración este maravilloso proceso democrático que vive la Argentina de 1985.

No hay soluciones mágicas para ningún problema. Pero el futuro es indudablemente promisorio si asumimos la gravedad de la situación y actuamos correctamente.

Los radicales hoy tenemos una gran responsabilidad en esta tarea, evitando

la "interna" chiquita y teniendo constancia y tesón en la "interna grande", la que debe dedicarse a construir una fuerza partidaria que pueda ser la columna vertebral del movimiento nacional en la Argentina y que pueda conducir a la Nación en su lucha por la liberación, la integración continental y la construcción de la sociedad más justa, más libre y más igualitaria.

Nuestro partido debe expandirse con un objetivo claro desde que asumimos cuál es la contradicción fundamental del país: representa a todos los sectores sociales que componen la Nación Argentina.

Esto implica conseguir en nuestro partido una especie de síntesis histórica, que integre la concepción partidaria yrigoyenista con la concepción social del peronismo.

Podemos decir, en efecto, que Yrigoyen construyó un partido político que representó al movimiento nacional en una etapa de su historia. Integró políticamente al país consolidando la primer experiencia de partido nacional superadora de las expresiones provincianas aisladas, pero no acertó a integrar a los sectores sociales.

Perón, por su parte, impulsó un esquema organizativo para el movimiento nacional que integró a los sectores sociales pero careció de un funcionamiento interno orgánicamente democrático que le permitiera procesar las contradicciones internas del campo popular, los problemas inter-sectoriales, en forma razonable y libre.

Nuestra tarea histórica es sintetizar estas dos valiosas experiencias políticas de nuestra vida nacional. Construir un partido democrático que tenga presencia en los sectores sociales y que represente orgánicamente sus intereses, sin alterar su profundo contenido democrático (es decir, no corporativo) pero asumiendo la realidad compleja de una sociedad de masas, y dando a la cuestión nacional un tratamiento prioritario. Cuestión nacional que pasa en la Argentina por impulsar un modelo de funcionamiento político que

1. Represente a toda la Nación
2. Procese adecuadamente los conflictos internos del campo popular.
3. Elabore el proyecto nacional en forma racional y armónica.
4. Genere cauces de participación individual y sectorial para todo el pueblo.
5. Sea la herramienta para transformar la sociedad.

Sintéticamente es ésta la estrategia de construcción de la fuerza popular en la Argentina de 1985.

Pero esto no debe hacernos olvidar la realidad. La meta, el objetivo estratégico que como partido perseguimos, debe conseguirse partiendo de lo que vivimos hoy, cuando la Unión Cívica Radical no representa a toda la Nación, no es la herramienta que permita procesar adecuadamente los conflictos internos del campo popular, no ha elaborado aún el proyecto nacional en forma racional y armónica, no ha generado cauces de participación adecuados individual y sectorialmente, y no es aún la herramienta para transformar la sociedad.

La fuerza con las características que hemos enunciado no existe en la Argentina. Quizás la nuestra sea la que más se acerque a ese modelo, pero que está aún a distancia del mismo. Y la Unión Cívica Radical, a pesar de no ser el partido ideal, es el partido del gobierno, y por lo tanto debe dar respuestas que no serán lo adecuadas desde un punto de vista ideal, pero que deben aproximarse lo más posible.

Si nosotros no representamos a toda la Nación, debemos marchar hacia una política de alianzas estratégicas con las fuerzas que integran objetivamente la Nación, entendiendo que para luchar contra el enemigo -la dependencia, la concentración financiera, la antidemocracia, la desintegración- debemos sumar a todas las fuerzas y sectores nacionales.

Cierto es que el rol de la oposición muchas veces no nos ayuda. Desde el peronismo, volcado a su situación interna -de la que es deseable que salga fortalecido, pero que le resta en la coyuntura el rol de interlocutor natural en la democracia- hasta la izquierda -muchas veces tentada por un facilismo utópico que no nos deja propuestas que enriquezcan la polémica política con propuestas posibles-, la tarea de unir las fuerzas populares presenta muchas dificultades.

En el plano social, los déficits orgánicos sectoriales son enormes. Las cúpulas, como alguna vez lo afirmó nuestro Presidente, no son cabales representaciones de las bases y también caen en la tentación fácil de reclamar por beneficios para los sectores sin asumir en su totalidad la problemática nacional.

Pero debemos asumir antes que nada nuestras falencias. Y nosotros no hemos hasta ahora dado el debate consciente en el seno de la sociedad argentina y más bien hemos adoptado la actitud de hacernos responsables solitarios de la marcha del gobierno, no hemos dado la discusión en los organismos sectoriales, hemos abandonado la calle y nos hemos desmovilizado. Es decir, también tenemos culpas, e importantes.

De lo que se trata ahora es de encontrar canales de comunicación más fluidos con nuestros aliados naturales. Y son aliados naturales todas las fuerzas políticas del país que sostengan la vigencia de la democracia y estén dispuestas a luchar contra el autoritarismo, contra el golpismo, contra la dictadura y por la plena vigencia de todas las libertades.

Ni el justicialismo, ni el Partido Intransigente, ni ninguna fuerza popular son enemigas del gobierno a pesar de sus posiciones críticas en aspectos sectoriales de nuestra acción de gobierno. Debemos fortalecer con ellas el diálogo permanente, las movilizaciones conjuntas, el estudio de problemas concretos para impulsar también en conjunto soluciones concretas y sostenerlas con movilizaciones, y debemos generar una solidaridad militante que trascienda los límites partidarios para alcanzar a todos quienes estén en la causa nacional y popular, en la lucha democrática.

Esta unidad no puede gestarse, como en las épocas de la dictadura, a partir de slógans que -justos en esa época- no sepan abarcar la diversidad de los problemas que atraviesa internamente nuestro pueblo. Al decir internamente, el concepto va dirigido a señalar que existen problemas o contradicciones secundarias que deben tener un tratamiento adecuado a su condición de tal, y que para esto debemos estudiar permanentemente la realidad.

No vale más la actitud desarrollada frente a la dictadura, cuando la estrategia era juntar todo lo que fuera posible para golpear firmemente al antipueblo hecho gobierno para provocar su retirada.

Hoy -lo repetimos- el gobierno no es ocupado por el antipueblo sino por un importante y mayoritario sector popular, acertado en algunas de sus medidas, quizás equivocado en otras, pero en todo caso apuntando hacia el mismo enemigo que toda la Nación.

Las fuerzas opositoras deben asumir esta realidad como base para impulsar la tarea conjunta. Esta es su responsabilidad, así como la nuestra es asumir la necesidad de la unidad.

Nosotros debemos entender que para poder dar sustento social a medidas que impliquen golpear fuertemente al privilegio -como la reforma financiera, o la reforma tributaria- necesitamos el apoyo de todo el pueblo. La oposición debe entender que si frente a luchas que implican golpear el privilegio encaradas por el gobierno, retacean su apoyo o abren frentes en la retaguardia, sin querer pueden estar haciéndole el juego a la derecha.

La actitud y el sentimiento de la unidad nacional debe estar, por su parte, siendo la guía para todos. Esto implica estar dispuestos a bajar el tono de las discusiones que implican discrepar internamente dentro del campo popular para levantarlo cuando se pelea contra el enemigo de la Nación, no contra el gobierno -ni contra la oposición popular-.

Está claro que los sectores más retrógrados y recalcitrantes de la sociedad no aceptarán de buena gana ceder sus privilegios ni aceptar pacíficamente la consolidación de una sociedad democrática. Golpearán con las armas que tienen: la gran prensa, la usina del rumor, el divisionismo, generar enfrentamientos intestinos y desconfianzas mutuas dentro del campo popular y aún dentro de los partidos, incentivar las luchas internas de las fuerzas populares, preconizar la intolerancia y la falta de razonabilidad en la polémica política. Estas armas, en una sociedad sin experiencia democrática consolidada, plena de carencias, estancada en su crecimiento, al borde de la hiperinflación, infiltrada políticamente por sus enemigos y dominada económicamente por fuera y por dentro también por sus enemigos, puede provocar el fracaso de la democracia si no existe conciencia cabal de la situación en los protagonistas de la historia, dentro de los cuales cumplen un rol de destacada responsabilidad los dirigentes políticos y sectoriales populares.

Nuestra política de alianzas, en síntesis, no puede estar alejada y por el contrario debe ser la consecuencia natural y lógica de nuestra propuesta de unidad nacional. Unidad para la democracia. Unidad para avanzar en la construcción de una sociedad libre. Unidad para lograr la integración continental. Unidad para racionalizar nuestros problemas. Unidad para luchar contra los enemigos comunes.

Unidad en las cúpulas y unidad en las bases. Tolerancia, diálogo fraterno, pluralismo y predisposición para encontrar solución a los problemas planteados, con imaginación, audacia e inteligencia, pero también con racionalidad y sensatez.